

NUMERO 66

7.^a SESION DE PRORROGA — OCTUBRE 10 DE 1884

Presidencia del señor MADERO

Senadores presentes: Alvear, Baibiene, Baltoré, Cambaceres, Carrillo, Cello, Dávila, Febre, Gelabert, Igarzábal, Juárez Celman, Mendoza, Moyano, Navarro, Nougues, Oliva, Ortiz y Santillán.

Senadores ausentes, con aviso: Bárcena, Cortés, Gil, Pizarro y Rocha.

Senadores ausentes, con licencia: Avellaneda, Barros, Civit, del Valle, Rodríguez, Rojas y Zapata.

SUMARIO

- 1.—Continúa la discusión del proyecto de ley en revisión sobre administración de los territorios nacionales. Se aprueba.
- 2.—Se aprueba un despacho de la Comisión de Hacienda autorizando al Poder Ejecutivo a la adquisición de un terreno adyacente al cuartel de artillería en el Parque 3 de Febrero.

—En Buenos Aires, a diez de Octubre de mil ochocientos ochenta y cuatro, reunidos en su sala de sesiones el señor presidente y los señores senadores arriba inscriptos, se abrió la sesión con inasistencia de los señores senadores Avellaneda, Barros, Civit, del Valle, Rodríguez, Rojas y Zapata, con licencia; y los señores senadores Bárcena, Cortés, Gil, Pizarro y Rocha, con aviso.

Se lee y aprueba el acta de la anterior de 9 del corriente (6.^a de prórroga).

1

Sr. Presidente. — No habiendo ningún asunto entrado, continúa la discusión sobre la ley pendiente.

Sr. Secretario. — Quedó pendiente el artículo 2.^o, que es el siguiente: «El Poder Ejecutivo podrá subdividir las gobernaciones en las sec-

ciones que aconsejaren las conveniencias generales, designándoles sus capitales respectivas.»

Sr. Presidente. — Si a la Cámara le parece, se darán por aprobados los artículos no observados.

—Apoyado.

—Queda aprobado el artículo 2.^o, lo mismo que el:

Artículo 3.^o — Declárase a las gobernaciones comprendidas en la ley de 25 de Septiembre de 1871, sobre subvenciones para el fomento de la educación primaria, en las condiciones de las provincias más favorecidas.

—En discusión el:

Artículo 4.^o — Cuando la población de una gobernación alcance a sesenta mil habitantes, constatados por el censo general y los suplementarios sucesivos, tendrá derecho para ser declarada provincia argentina.

Sr. Cello. — Pido la palabra.

No recuerdo ya el texto de la ley, y, por lo tanto, ignoro si hay en ella alguna cláusula que disponga la época en que el Poder Ejecutivo ha de hacer el censo de estas poblaciones, para hacer efectiva la disposición de este artículo.

Sr. Nougues. — No hay disposición fuera de ésta, que se refiera a este punto; pero existiendo la prescripción general de que se forme el censo cada diez años, la Comisión ha creído

que era suficiente, sin perjuicio de que estos gobiernos puedan decretar censos parciales.

Sr. Cello. — Está bien, señor.

—Queda aprobado el artículo 4º. El 5º se aprueba sin observación, como sigue:

Artículo 5º — El Congreso demarcará en cada caso, con arreglo a esta ley, los límites de las nuevas provincias que se formen.

—Se lee:

DEL GOBERNADOR

Artículo 6º — El gobernador será nombrado por el Poder Ejecutivo. Durará tres años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelecto, y teniendo el Poder Ejecutivo la facultad de exonerarlo de su cargo.

Sr. Igarzábal. — Pido la palabra.

Cuando el señor miembro informante hablaba en general sobre este proyecto, le oí dar las razones en que la Comisión se fundaba para haber suprimido el acuerdo del Senado en los nombramientos que pudiera hacer el Poder Ejecutivo de gobernadores de estos territorios, y, tanto porque es conveniente ese acuerdo, cuanto porque no puede aceptarse el principio en que basaba la Comisión la supresión, voy a oponerme a ella y a dar las razones que tengo.

El miembro informante dijo que por el inciso 10 del artículo 86 de la Constitución, el presidente de la República tenía la facultad de nombrar todos los empleados de la administración que no estuviesen exceptuados por ese mismo inciso.

Partía de un error completo, porque en el inciso 10 no hay referencia alguna, ni ha podido comprenderse que la hubiera, a la organización de los territorios federales. Bajo nuestra formación de gobierno, bajo la forma republicana, el pueblo es el que elige los mandatarios. Los territorios federales son proyectos de provincias, provincias en ciernes. La Constitución ha querido que el gobierno general prepare a esos territorios, para que en oportunidad sean provincias con todos los derechos de las demás de la República, y, por excepción, ha establecido que mientras esos territorios estén en estado de ser provincias, el Congreso les dicte su Constitución política.

Esta atribución dada al Congreso está consignada en el mismo inciso 14, artículo 77, donde se dice que el Congreso dictará, por medio de leyes especiales, la organización y gobierno que deben tener los territorios federales.

Se ha establecido ésta como una facultad especial. El Congreso, pues, es el facultado a dictar la carta constitucional de los territorios federales, la carta provincial, como se llama en Estados Unidos, y esta carta prevalece mientras que la población de esos territorios no esté en aptitud de darse por sí misma la Constitución.

Establecido así el principio, tenemos esto: que en esa carta, que en la República Argentina va a ser precisamente la Constitución de esos territorios, se puede establecer que los funcionarios sean nombrados por los habitantes del territorio, si el Congreso quisiera establecerlo, apenas haya una población de mil almas o de quinientas, por ejemplo.

El Congreso quiere que mientras no haya sesenta mil almas, el presidente de la República nombre el gobernador y de ahí se deduce, puesto que no es facultad propia del presidente de la República, que es una facultad provisional que le acuerda de un modo especial la carta constitutiva de estos territorios nacionales.

Los territorios nacionales no son dependencias de la administración nacional, como es una aduana, como es un colegio, como son todas aquellas reparticiones que están bajo la administración general del país, que está a cargo del presidente de la República; no.

Y puedo presentar un ejemplo, que convencerá mejor que lo dicho a la Comisión, de la errónea doctrina que ha sostenido el señor senador que habló a nombre de ella.

El gobierno de la Capital, pertenece de derecho al presidente de la República, y sin embargo, el intendente municipal es nombrado con acuerdo del Senado, no obstante que ese funcionario no está mencionado en el inciso 10 del artículo 86 de la Constitución. ¿Por qué? ¿Porque no es uno de los empleados de la administración general del país a que se refiere el artículo citado? No, señor. La Capital tiene su constitución política dada por el Congreso, y es la ley orgánica de su régimen municipal, como va a tener cada territorio federal, su constitución política y el nombramiento de empleados, como en muchas otras disposiciones, el Congreso es dueño de establecer lo que crea conveniente, sin que con eso se menoscabe en lo más mínimo ninguna prerrogativa atribuida por la Constitución a los otros poderes.

Si se creyeran aceptables, señor presidente, estas consideraciones, que están de acuerdo con los principios de derecho constitucional que rigen la materia, porque son los principios que rigen en Estados Unidos, de cuya Constitución está tomada esta atribución de dictar la ley general, para organizar territorios, creo que lo

que deberíamos hacer es aceptar el artículo 6º tal como lo ha sancionado la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados ha atribuido, y creo que el proyecto del Ejecutivo también, el nombramiento de gobernador de estos territorios al presidente de la República «con acuerdo del Senado».

Ya que está sancionado por la Cámara de Diputados, renunciar a esta atribución, cuando es evidente que entraña grandes conveniencias para el servicio de los territorios nacionales, me parece que no se explicaría esto.

Es preciso tener en cuenta que, tratándose nada menos que de un gobernador de un territorio, que va a gobernar cincuenta o sesenta mil almas, que debería ser nombrado por el pueblo de ese territorio, aunque por no tener categoría de provincia ha de ser nombrado por el presidente de la República, debe robustecerse su nombramiento con la opinión y el valor de la sanción del Senado, de modo que vaya ese funcionario acompañado de las simpatías del Congreso, que lleve el concurso de la opinión pública en cuanto el Senado de la Nación pueda darla; eso contribuiría a su estabilidad y a hacer de este funcionario un empleado con independencia del mismo Poder Ejecutivo; y por fin, le colocaría en las condiciones en que debe estar el primer funcionario de un territorio que está llamado a ser provincia, y que desde luego es una repartición completamente independiente del Poder Ejecutivo nacional.

Por estas razones, señor presidente, sostengo que debe exigirse el acuerdo del Senado para el nombramiento de gobernadores de territorios federales.

Sr. Nougués. — Pido la palabra.

No es la primera vez que este punto ha sido debatido en esta Cámara. Por mi parte, tengo convicciones muy arraigadas a este respecto, y soy consecuente hoy con las ideas que sostuve el año pasado.

La mayoría de la Comisión ha examinado detenidamente este punto, y ha creído que, sin apartarse de las prescripciones constitucionales, no puede aceptar la sanción de la Cámara de Diputados.

Contestaré al señor senador, comenzando por el punto con que ha terminado su exposición, manifestando su extrañeza de que el Senado renuncie una facultad que se le acuerda por la sanción de la Cámara de Diputados al dársele intervención en estos nombramientos.

Como es sabido, uno de los primeros deberes que tienen los que forman parte del Senado, de

la Cámara, como todo funcionario público, es que cuando llega el caso de una duda, el examinarlo, pronunciándose ante todo sobre la extensión de los poderes que corresponden al cuerpo que él pertenece.

Por consiguiente, si se trata de una facultad ejecutiva, que se atribuya al Congreso, creo que el primer deber del Senado, como de la Cámara de Diputados, es desecharla y limitarse simplemente al ejercicio de aquellas que expresamente le están atribuidas por la Constitución.

Así, pues, no soy de opinión que deba preocuparnos él si es esta una facultad que se renuncia, y sí que debemos sujetarnos estrictamente a lo que dispone la Constitución.

Ahora, examinando a este respecto los términos de la Constitución americana y los de la argentina, se notan diferencias bien marcadas, que justifican de una manera completa las diferentes disposiciones que ha adoptado Estados Unidos en varias de sus leyes, disposiciones, que, dados los términos de nuestra Constitución, no tendrían justificación si se adoptaran.

Sr. Igarzábal. — ¿Quiere el señor senador citar la disposición en virtud de la cual el presidente de Estados Unidos nombra todos los empleados de la administración de acuerdo con el Senado?

Sr. Nougués. — Voy allí.

No haré perder tiempo a la Cámara, buscando el artículo de la Constitución americana a que hago referencia, pues tengo muy presente que en ella se establece que el presidente nombra y remueve los empleados de la administración con acuerdo del Senado aquellos determinados por la Constitución, haciendo todos los demás nombramientos por sí, a menos que una ley exprese lo contrario.

Creo que el señor senador recordará ese artículo.

Sr. Igarzábal. — ¿Cómo no!

Sr. Nougués. — Este artículo faculta al presidente para hacer los nombramientos por sí, o con acuerdo del Senado en los casos en que ella determina, y los hará también con acuerdo del Senado cuando lo determine una ley, cláusula que no existe en la Constitución argentina.

Sr. Igarzábal. — Es cierto.

Sr. Nougués. — La Constitución argentina establece claramente que el Poder Ejecutivo hace los nombramientos por sí o con acuerdo del Senado, en los casos que expresamente determina; y en aquellos no determinados, los nombra y renueva por sí sin intervención alguna del

Senado. Por consiguiente, hay al respecto entre una y otra Constitución una notable diferencia.

En la primera se faculta para que la Legislatura nacional pueda, por medio de sus leyes, establecer condiciones en los nombramientos, facultando al Ejecutivo para hacer el nombramiento por sí cuando lo estime conveniente, y pueda también por medio de sus leyes establecer la condición de que el nombramiento se haga con acuerdo del Senado; cláusula que no existe en la Constitución argentina, lo que demuestra que el principio que se ha establecido en nuestra Carta Fundamental es más general y que sus excepciones, por lo tanto, son mucho más limitadas.

Así, hemos visto que en Estados Unidos se ha llegado hasta el extremo, en varias de sus leyes, de imputar al presidente de la República la obligación de no remover aun los secretarios de Estado en el Departamento Ejecutivo. Como debe recordar el señor senador, cuando se trataba del general Stanton, ministro de guerra, que pretendía remover el presidente Johnson y que el Congreso se oponía.

Sr. Igarzábal. — Fué uno de los puntos por los cuales se le formó juicio político.

Sr. Nougués. — Por consiguiente, se ve que en Estados Unidos se ha reconocido la facultad ilimitada del Congreso para poder dictar leyes por las cuales se podía restringir esta facultad del Poder Ejecutivo. Entre nosotros no ha sucedido lo mismo.

Existiendo este punto de partida, por mi parte he considerado indebida la intervención que se ha dado al Senado en todos aquellos nombramientos que no están expresamente marcados por la Constitución.

Creo pues, que al dictarse la ley para la gobernación de los territorios nacionales, debe observarse los principios fundamentales de la Constitución, y principalmente en este caso, que se trata del ejercicio de una facultad que le corresponde al Ejecutivo, no creo conveniente venir a alterarla.

Estas son las razones que ha tenido la Comisión para aconsejar este despacho.

Sr. Carrillo. — Pido la palabra.

Mis opiniones, en este caso, están de perfecto acuerdo con los que acaba de manifestar el señor senador por San Juan.

Pienso, señor presidente, que, dada la sanción de la Honorable Cámara de Diputados, el Senado argentino no puede, no debe declarar — porque esto importaría la aceptación del dictamen de la Comisión —, que es repugnante a la Constitución, a los intereses comunes de la Nación, la participación, aunque in-

directa, que se da en la elección de los que han de presidir estas secciones administrativas que se van a crear en los territorios nacionales.

No es repugnante a la Constitución, señor presidente, porque todos los Congresos, hasta ahora han interpretado cuál debe ser el sentido de la cláusula de la Constitución a que ha aludido el señor miembro informante de la Comisión de Legislación.

En esta Cámara, como en la de Diputados, hay hombres de Estado conocedores del sistema constitucional y de las prácticas observadas en otros países que se rigen por las mismas instituciones que las nuestras, y no han puesto en duda la facultad del Congreso, de rodear la elección de ciertos funcionarios de todas aquellas garantías que aseguren el acierto en la ejecución de las delicadas funciones que se les encomienda.

Lo hemos visto así en el caso a que se ha referido el señor senador por San Juan, en el caso de la organización del gobierno municipal de la capital de la República, en que a pesar de la cláusula terminante de la Constitución, que hace al presidente de la República, el jefe inmediato de la Capital, el Congreso ha establecido la forma en que se ha de hacer la elección de la persona que ha de desempeñar las funciones ejecutivas.

Lo hemos visto en otros casos también, menos importantes tal vez que éste: está aceptado que el presidente de la República no nombra por sí solo al presidente del Consejo de Educación, ni al presidente y directores del Banco Nacional, que es una institución no precisamente fiscal desde que concurren allí intereses particulares.

En el caso presente se trata de asegurar el acierto en el nombramiento de gobernadores que van a desempeñar funciones mucho más delicadas que las del intendente municipal, que las de presidente del Concejo, que las de los directores del Banco; porque, debe tenerse en cuenta, señor presidente, que los gobernadores de los territorios nacionales no van a desempeñar allí comisiones puramente ejecutivas, a cumplir reglamentos administrativos: van a ir a aquellos territorios a representar la soberanía nacional, a representar al gobierno de la Nación, no al Poder Ejecutivo, haciendo sentir allí su acción fecunda y poderosa en el sentido de promover el aumento de la población y el desarrollo de las industrias.

La Constitución ha indicado, en estos casos, la conveniencia que hay en que no sea de la sola discreción del Poder Ejecutivo la elección de tales funcionarios.

Los gobernadores van a ejercer, según el mismo proyecto, algo más que comisiones meramente administrativas, desde que ellos eligen los jueces de paz.

En una palabra, como decía antes, representarán al gobierno de la Nación en aquellos territorios.

Es natural, entonces, que concurren a su elección no sólo el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo; y a manera de que éste tome parte, la ha indicado la Cámara de Diputados, señalando al Senado de la Nación, al Senado, que tiene relaciones políticas inmediatas con el Poder Ejecutivo, para que se haga con su asentimiento la designación de los que con el título de gobernadores han de velar mejor por la administración, el fomento y progreso de todos aquellos territorios.

Siendo tan vastas, pues, tan delicadas esas funciones, nada más natural que el Senado de la Nación no renuncie al derecho que le acuerda este proyecto sancionado por la Cámara de Diputados.

Lo contrario importaría declarar implícitamente que su participación, su influencia en la elección de estos gobernadores es insignificante, es nula y no debe tenerse en cuenta.

Sr. Igarzábal. — Pido la palabra.

Cuando me he referido a Estados Unidos, señor presidente, no ha sido precisamente invocando la facultad del presidente de aquel país, de hacer todo nombramiento de empleados públicos con acuerdo del Senado. No; porque esa facultad no puede invocarse en ningún caso en la República Argentina, desde que tenemos en nuestra Constitución disposiciones especiales que le son contrarias.

Me he referido a la facultad del Congreso de organizar por medio de una ley especial la gobernación de los territorios nacionales, y he dicho que las leyes que dictaba el Congreso, según el artículo 67, inciso 14 de la Constitución, eran Cartas, eran verdaderas Constituciones, y hago notar al señor miembro informante de la Comisión que, cada vez que la Constitución argentina quiere que la ley que sancione el Congreso tenga un carácter constitucional, diré así, distingue con el nombre de leyes especiales, legislación especial: «especial».

De ahí se deduce, pues, que esta clase de leyes son leyes de excepción, son leyes de carácter permanente que no es conveniente ni prudente estar tocándolas todos los días, porque son leyes de carácter constitucional, como he dicho antes.

La ley que organiza el gobierno de un territorio, esta misma ley que estamos sancionando

ahora, ¿podrá o no dar el nombramiento de las autoridades de aquellos territorios a sus mismos habitantes? Yo digo que sí, señor presidente. Indudablemente no habría ninguna disposición constitucional que se opusiera a que se diga que los gobernadores, cuando haya treinta mil almas en su territorio, serán elegidos por los electores del territorio.

Podría la ley, y no menoscabaría en lo más mínimo al presidente de la República en sus facultades de hacer nombramientos para la administración general del país.

¿No dice la ley que los jueces de paz han de ser en ciertos casos nombrados por los vecinos, cuando la población haya llegado a mil habitantes, me parece?

En esta disposición ya tiene el señor miembro informante la prueba de lo que estoy diciendo; que una ley como ésta, que es la constitución política de aquellos territorios, puede hacer más o menos concesiones, no sólo a las atribuciones especiales que ella le confiere al presidente de la República, sino aun a las facultades del mismo pueblo del territorio, porque puede decir: cuando haya treinta mil habitantes nombrará un gobernador, como dice: cuando haya mil almas en cada agrupación, nombrará su juez de paz, así como también dice: cuando haya cierto número de habitantes, la constitución de la población será de tal o cual manera, se podrá constituir una Legislatura, etcétera.

¿Qué es, pues, esto sino una Constitución?

Esto no es una ley común; no es una ley para la administración nacional. De manera que no se menoscaba absolutamente atribución alguna del presidente de la República, porque los empleados que ella crea no tienen nada que ver con aquellos a que se refiere el artículo 80, inciso 10 de la Constitución.

Así, pues, me parece que sin escrúpulo alguno podemos votar que el Senado tendrá participación en la elección de gobernadores de esos territorios.

Sr. Nougués. — Pido la palabra.

Reconozco, como lo afirma el señor senador por San Juan, que cuando llegó el momento de dictar las leyes federales para la capital de la República, ha sido uno de los casos en que nuestra Constitución hablaba de leyes especiales; pero las consideraba leyes especiales no porque tuvieran un carácter diverso de las demás, sino por las circunstancias en que tenían que dictarse; porque, entonces, el Congreso no venía a dictar leyes de carácter nacional, sino de carácter local, que habían de aplicarse solamente en la capital de la República.

Por consiguiente, hay esta especialidad: que estas leyes no tienen la extensión de todas las demás leyes nacionales. Sucede lo mismo con ésta que se refiere a la organización de territorios nacionales, porque ella sólo tiene aplicación para esos territorios: no tiene el carácter general que tiene toda ley nacional que afecta a todos los individuos de la República.

Pero, tanto en las leyes especiales como en las leyes generales, creo que no podemos separarnos de los principios fundamentales de gobierno que nos rigen, de tal manera que el Poder Ejecutivo no pueda invadir atribuciones del Poder Legislativo y viceversa.

Creo, como el señor senador por San Juan, que el Congreso puede establecer que los gobernadores sean nombrados por elección de los vecinos de esos territorios. Pero si se establece que los gobernadores han de ser nombrados por algún poder, entonces no creo que pueda desconocerse en el Poder Ejecutivo la facultad que exclusivamente tiene de hacerlo.

Como he recordado, en nuestra Constitución los términos son muy explícitos. El Poder Ejecutivo nombra ciertos empleados con acuerdo del Senado, y todos aquellos que no están expresamente marcados, los nombra él por sí, con arreglo a la Constitución que establece que el Poder Ejecutivo nombra todos los empleados de la administración.

Sr. Igarzábal. — No ha contestado el señor senador el argumento que se le ha hecho con el nombramiento del intendente de la Capital, que se hace con acuerdo del Senado, a pesar de ser el presidente de la República el jefe inmediato de la Capital.

Sr. Nougués. — Se me había pasado...

Sr. Carrillo. — Hay esta circunstancia más.

El proyecto de ley orgánica vigente actualmente, fué presentado por el Poder Ejecutivo, y él mismo indicaba el temperamento del acuerdo del Senado, para asegurar el mejor acierto en la elección.

Sr. Juárez Celman. — Sin embargo, algunos miembros de la Corte creen que eso es inconstitucional.

Sr. Nougués. — Voy a hacer notar otra equivocación.

El proyecto establecía que los gobernadores serían nombrados por el Poder Ejecutivo, sin intervención del Senado, y la Comisión de la Cámara de Diputados agregó esta cláusula: con acuerdo del Senado.

Creo conveniente rectificar, ante todo, esta equivocación.

Como lo manifesté al empezar, reconozco que

hay varios precedentes establecidos en nuestro país, tanto en el nombramiento de intendente municipal como en el de presidente del Banco Nacional.

He recordado que el año pasado, al sancionarse la ley de educación, se ha establecido que el nombramiento del presidente del Consejo Nacional de Educación será hecho por el Poder Ejecutivo de acuerdo con el Senado, y he dicho también que me encontré en oposición con ese artículo, y, por tanto, en contra del proyecto en que en él se sanciona.

Más que todo, creo que estas son razones decisivas: en mi opinión, ha sido una interpretación errónea.

He visto que por parte del Poder Ejecutivo, en repetidas ocasiones, se ha salvado esta invasión, puede decirse, del Poder Legislativo de las facultades ejecutivas que la Constitución establece, y no creo, por consiguiente, que haya razón para exigir, como se ha querido, el acuerdo del Senado en estos nombramientos. Me parece, pues, que esto es lo más propio y lo más ajustado a los términos de la Constitución.

El señor senador por Jujuy ha tratado de fundar la disposición por la cual se creía que el nombramiento de gobernador debía ser hecho con acuerdo del Senado, y afirmaba que por esta ley se le conferían ciertas facultades judiciales al gobernador.

Sr. Carrillo. — Que iría a representar la soberanía nacional en esos territorios.

Sr. Nougués. — La soberanía nacional no tiene más representantes que los que están en esta Cámara: fuera de ella habrá algo que se asemeje, pero nada que pueda llamarse con propiedad representante de la soberanía nacional.

Los representantes son elegidos de acuerdo con la Constitución, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y los nombramientos que está facultada a hacer por esta ley de jueces de paz, se limitan a aquellos casos en que se trata de poblaciones que tengan más de mil habitantes.

Sr. Carrillo. — Las garantías deben ser las mismas, sean muchos o pocos los habitantes.

Sr. Nougués. — Son funciones que no pueden llamarse judiciales, porque vienen a ser facultades ejecutivas, y estas son facultades que, no sólo en el orden nacional, sino en el orden provincial, no le han sido disputadas a los gobernadores de provincia. Por lo demás, se establece una modificación que consiste en que, cuando un pueblo no haya llegado al número de mil habitantes, es facultad de los vecinos elegir al

juez de paz que ha de prestar esos servicios en esa localidad.

Por otra parte, para no tener que volver a hacer uso de la palabra, cuando llegue a tratarse del nombramiento de juez letrado, creo conveniente llamar desde ahora la atención sobre la gran diferencia que hay entre el juez letrado con los demás empleados que han de nombrarse. El juez letrado, no sólo desempeña las funciones de juez local en esa población, sino que tiene facultades que corresponden al juez federal.

La Comisión ha creído, en consecuencia, que esta idea, respetando la prescripción constitucional que establece que los jueces federales, así como los miembros de la Corte, deben ser nombrados por el Poder Ejecutivo, ha creído que debe dejarse subsistente esta cláusula, por la cual estos nombramientos se harán por el Poder Ejecutivo de acuerdo con el Senado.

Sr. Juárez Celman. — No voy a hacer discusión, porque no he venido dispuesto a sostenerla, pero voy a manifestar las razones de mi voto en favor del proyecto como ha venido de la Cámara de Diputados, porque creo que está completamente de acuerdo con la prescripción constitucional.

Es una razón indudablemente muy atendible, y creo que en la mayor parte de los casos no podrá negarse, que todo nombramiento que fuera diferido a los poderes públicos ofrecería mayor garantía, siempre que tuviera el requisito de contar con el acuerdo del Senado. Esto no puede ponerse en duda, la Constitución misma lo establece, tratándose de cierta clase de funciones en que ella misma ha establecido el acuerdo del Senado, buscando mayores garantías.

Pero, señor presidente, cuando la Constitución, por excepción, ha concedido estas funciones al Senado, que no son funciones legislativas, es claro que importa negarle esta intervención en todos aquellos nombramientos que no están expresamente determinados en la Constitución misma, y siendo la única razón que pueden alegar en este caso los que sostienen el acuerdo del Senado, la razón de la garantía, me parece que no hay mayor garantía que el respeto a la Constitución.

Esta es la mayor de las garantías, la mayor de las seguridades con que se puede proceder, tratándose de una ley tan importante como ésta.

Sr. Carrillo. — La Constitución ha sido interpretada por el Congreso uniformemente en el sentido de que todos los funcionarios de cierta

importancia, creados por leyes especiales, requieren el acuerdo del Senado para su nombramiento más acertado.

Sr. Juárez Celman. — Hay algunos precedentes, en los que no ha ocurrido ninguna dificultad, para ser llevados ante los tribunales; pero yo tengo la convicción, y en esto opino con muchos constitucionalistas notables de la República Argentina, que el primer día que ocurra una reclamación y esta sea llevada ante la Corte Suprema, será fallada en el sentido contrario a esa interpretación.

Sr. Igarzábal. — Si se trata de alguna Cámara de Apelación, sería necesario que ella se declarase inconstitucionalmente funcionando, porque el nombramiento de los jueces de la Capital no está por la Constitución sujeto a la aprobación del Senado. Es un caso que se ha establecido por la ley.

De manera que si fuera a declarar eso, tendría que declarar también que ella estaba funcionando inconstitucionalmente.

Sr. Juárez Celman. — El Senado sólo tiene funciones legislativas y únicamente desempeña funciones ejecutivas en los casos que bien claramente ha establecido la Constitución.

Si no fuera así, mañana podríamos dictar una ley por la cual todos los nombramientos, empezando por los ministros, fueran hechos con acuerdo del Senado; pero entonces la independencia de los poderes habría concluido completamente.

Todo está previsto perfectamente en la Constitución, y al haberse separado en esta parte la Constitución argentina de la Constitución de Estados Unidos, para determinar todos los nombramientos que deben ser hechos con acuerdo del Senado, ha tenido buen cuidado de establecer cuáles son los que requieren ese requisito.

El señor senador me observaba que este proyecto había venido así del Poder Ejecutivo, y que la Cámara de Diputados lo había sancionado en esta forma, porque creía que estos nombramientos ofrecían mayores garantías así.

Yo entiendo que es muy peligroso entrar en ese camino, y que todos los nombramientos que no están incluidos en los que, según nuestra Constitución, deben ser hechos por el Poder Ejecutivo de acuerdo con el Senado, deben ser hechos simplemente por el Poder Ejecutivo.

Sr. Igarzábal. — Yo estoy muy de acuerdo con el señor senador por Córdoba, en que la principal de las garantías es el respeto por la Constitución, y que en ese sentido el Senado debe ser muy escrupuloso al sancionar este proyecto.

Pero la cuestión no está sobre la facultad del Senado para exigir su acuerdo en los nombramientos del Poder Ejecutivo, tratándose de los funcionarios que el presidente de la República puede nombrar por sí en virtud del artículo 86, inciso 1º. Y sabe que son todos los empleados de la administración, con excepción de los ministros plenipotenciarios, encargados de negocios, los generales del ejército, los miembros de la judicatura federal, expresamente exceptuados por los incisos 5º, 10 y 16, sin embargo, que se han dictado leyes que han establecido que para el nombramiento de presidente del Banco Nacional, para el de presidente municipal y para el de los jueces de la Capital y Cámara de Apelaciones y también para el de presidente del Departamento de Educación, sea requerido el acuerdo del Senado.

Sr. Juárez Celman. — En ese camino podríamos no dejar un solo nombramiento que no requiera el acuerdo del Senado, ¿cuál sería el límite que tendría?

Sr. Igarzábal. — El límite me parece que sería un término prudencial, reducido a empleados de cierta categoría.

Sr. Juárez Celman. — ¿Quién ha de juzgar de la prudencia? ¿El mismo Senado?

Sr. Igarzábal. — La ley que pasa en el Congreso con el concurso de las dos Cámaras y del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo se considera menoscabado en sus facultades por una ley, le opone el veto. Así es que el criterio sería el de la ley.

Si una ley se ha dictado por el Congreso y ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo, quiere decir que esa ley ha pasado por todo el tamiz, todo el examen o el criterio más escrupuloso que puedan tener las leyes de un país; así es que el límite sería ese, y me parece que es bastante seguro, tratándose de leyes que son dictadas por dos Cámaras separadamente.

Sr. Juárez Celman. — Pero es un solo poder.

Sr. Igarzábal. — Pero la cuestión no está en eso.

Está en la naturaleza de la ley que estamos sancionando, que no es una ley general, que corresponda a la administración general del país; no, señor: es la Constitución política de los territorios nacionales, es una ley especial, es una ley en la que podemos atribuir el nombramiento...

Sr. Juárez Celman. — Está fuera de la Constitución.

Sr. Igarzábal. — Está fuera de las reglas generales de la administración del país; fuera

de la Constitución no, porque emana de la facultad que confiere al Congreso el inciso 14.

No está fuera de la Constitución, sino fuera de la administración general de la Nación, porque no se aplica esta ley sino a los territorios nacionales únicamente.

Repito que esta es una ley constitutiva de su gobierno; de manera que, como he dicho y no he sido contradicho, esta ley puede no conferir al presidente de la República el nombramiento de los gobernadores, y si puede no conferirle ese nombramiento, lo que no puede negarse, es claro que puede conferírsele a condición de que sea con acuerdo del Senado. Este no es empleado de aquellos a que se refiere el artículo 86, inciso 1º.

Toda la cuestión está, pues, en la naturaleza de la ley que, como he dicho antes, no es para la administración general, sino especial, como Constitución política de los territorios nacionales.

Sr. Juárez Celman. — Es una ley que, por más que no sea de carácter general, tiene que someterse a la Constitución.

Sr. Presidente. — Se votará el artículo, tal como lo ha propuesto la Comisión.

Sr. Carrillo. — Me parece que podría simplificarse la votación. La discusión que ha tenido lugar, sólo se ha referido a una parte del artículo; de modo que sería más sencilla la votación en estos términos: si se acepta o no la moción que propone la Comisión. Si no se acepta, se toma en consideración el de la Cámara de Diputados.

Sr. Nougués. — Lo más propio es que se vote el artículo propuesto por la Comisión, y si no se acepta, se tome en consideración el otro.

Sr. Gelabert. — Se puede votar si se acepta o no el acuerdo del Senado. Se trata de una autoridad que va a ejercer jurisdicción sobre el pueblo. No son empleados que nacen del Poder Ejecutivo; así es que yo creo que puede votarse por partes.

Sr. Baibiene. — Lo más correcto es lo que ha propuesto el señor senador por Jujuy: si se acepta o no la modificación introducida por la Comisión.

Sr. Baltoré. — Perfectamente; lo mismo ha de resultar de un modo o de otro.

El reglamento establece cómo ha de hacerse la votación.

Sr. Baibiene. — No es lo mismo, porque la mayor parte estamos de acuerdo con el texto del artículo tal como viene, y así, se nos obliga a votar en contra, porque hay una palabra que desdice de nuestra opinión.

Sr. Juárez Celman. — Quiere decir que, si

se rechaza el artículo de la Comisión, puede aprobarse como ha venido de la Cámara de Diputados, sin la modificación.

Sr. Presidente. — Entonces queda entendido que si es rechazado como lo propone la Comisión, queda aprobado tal como ha venido de la Cámara de Diputados. Se va a votar si se aprueba el artículo 6º como lo propone la Comisión.

—Se vota y resulta negativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado tal como ha sido sancionado por la Cámara de Diputados.

Sr. Baibiene. — Puede haber senadores que no lo acepten.

Sr. Presidente. — Entonces, se va a votar nuevamente el artículo 6º: si se aprueba como ha sido sancionado por la Cámara de Diputados.

—Así se hace y resulta afirmativa.

—Se aprueban en seguida sin observación los siguientes:

Artículo 7º — El gobernador tendrá los deberes y atribuciones siguientes:

- 1º Es la autoridad local superior, encargada de velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones nacionales;
- 2º Dicta reglamentos y ordenanzas convenientes para la seguridad, administración y fomento del territorio, en todo lo que sea materia de su incumbencia;
- 3º Propone las medidas necesarias para la mejor percepción de la renta;
- 4º Vigila el cumplimiento de los contratos celebrados por particulares con el Poder Ejecutivo, y el de las concesiones o privilegios que se acuerden;
- 5º Está obligado a informar al Poder Ejecutivo acerca de la regularidad con que proceden las oficinas y empleados directamente del gobierno nacional;
- 6º Nombra los jueces de paz en los distritos o secciones que tengan menos de 1.000 habitantes;
- 7º Propone los empleados de la gobernación cuyo nombramiento corresponde al Poder Ejecutivo;
- 8º Recibe las asignaciones del presupuesto y las invierte con sujeción a la ley, rindiendo mensualmente cuenta de su inversión;

- 9º Es el comandante en jefe de la gendarmería y guardia nacional, y deberá colocar en cada distrito un comisario de policía con su correspondiente dotación;
10. Distribuye la fuerza y presta el auxilio que requieran el juez letrado y los jueces de paz;
11. Procurará el establecimiento, en las secciones de su dependencia, de las tribus indígenas que morasen en el territorio de la gobernación, creando con autorización del Poder Ejecutivo las misiones que sean necesarias gradualmente a la civilización;
12. Vela por el progreso de la enseñanza, e informará sobre las medidas conducentes al desenvolvimiento de la colonización;
13. Depende directamente del Ministerio del Interior, residirá en el pueblo que se declare capital y no podrá ausentarse sin licencia del ministerio expresado;
14. Gozará de la asignación que le fije el presupuesto.

Del secretario

Art. 8º — El secretario será nombrado por el Poder Ejecutivo, a propuesta del gobernador del territorio.

Art. 9º — Tendrá los deberes y atribuciones siguientes:

- 1º Refrendar los actos del gobernador e intervenir en todos los pagos, percibo de dinero y rendición de cuentas;
- 2º Dirigir la oficina de la gobernación bajo la superintendencia del gobernador;
- 3º Guardar y conservar los registros y documentos referentes a los asuntos en que intervenga el gobernador, transmitiendo cada tres meses copias auténticas de tales actos y procedimientos al Ministerio del Interior;
- 4º Es responsable por todas las omisiones y transgresiones en los deberes y funciones que le son impuestas, sin que pueda excusarse del cumplimiento de ellas con órdenes o instrucciones del gobernador;
- 5º El secretario residirá en la capital de la gobernación, no podrá ausentarse sin licencia del gobernador, y gozará de la asignación que establezca el presupuesto;
- 6º En caso de muerte, ausencia o remoción del gobernador, desempeñará sus funciones mientras dure la vacancia.

De los jueces de paz

Art. 10.—En los distritos cuya población pase de 1.000 habitantes, los jueces de paz serán elegidos directamente por el pueblo, y la municipalidad de la sección, con dos tercios de votos, podrá removerlos por falta en el cumplimiento de sus deberes.

Art. 11.—Los jueces de paz durarán dos años en el ejercicio de sus funciones, y no podrán ser reelegidos.

Art. 12.—Para ser electo juez de paz se requiere ser ciudadano mayor de edad, domiciliado en la sección respectiva, y saber leer y escribir, no pudiendo ser nombrados para este cargo los militares en disponibilidad ni los empleados públicos.

Art. 13.—Son atribuciones de los jueces de paz, conocer y resolver:

- 1º En las causas civiles y comerciales, cuando el valor cuestionado no exceda de cien pesos, pero no en los juicios sucesorios o de concurso de acreedores;
- 2º En las demandas por desalojo, cuando no medie contrato por escrito, cualquiera que sea el valor de la demanda;
- 3º En las causas correccionales cuando la pena no exceda de cuatro días de arresto o veinte pesos de multa;
- 4º En las demandas reconventionales, siempre que su valor no pase de la cantidad fijada como límite a su jurisdicción;
- 5º Cuando las partes reconozcan la existencia de un contrato y tengan cuestiones relativas a las transacciones del mercado que versen sobre entrega de ganados y frutos, sobre fletes de los transportes terrestres y sobre exactitud de pesas y medidas.

Art. 14.—El procedimiento de los jueces de paz será verbal o actuado, resolverán a verdad sabida y buena fe guardada, exigiendo sin embargo, la defensa y la prueba.

Art. 15.—Cuando el valor de lo cuestionado no alcance a veinte pesos, las sentencias de los jueces de paz serán inapelables, lo mismo que las que dicten en causas correccionales.

Art. 16.—Podrán ser recusados por justa causa, y en tal caso el conocimiento del asunto corresponde al juez de paz más inmediato.

Art. 17.—Fuera de los casos señalados en el artículo 15, las sentencias de los jueces de paz serán apelables en relación y sin exigir el comparendo de las partes, dentro de cinco días útiles, para ante el juez letrado de la gobernación.

Art. 18.—Cada juzgado de paz tendrá un secretario nombrado por la municipalidad a propuesta del juez de paz y que actuará en todas sus decisiones.

Art. 19.—Antes de entrar en el ejercicio de sus funciones, los jueces de paz prestarán juramento ante el concejo municipal, de desempeñar fielmente los deberes de su cargo.

Art. 20.—Los jueces de paz darán cumplimiento a las comisiones que le sean conferidas por los jueces letrados.

Art. 21.—Los jueces de paz con sus secretarios residirán en la sección donde deban prestar sus servicios, no podrán ausentarse sin licencia del concejo municipal y tendrán el sueldo que les señale el presupuesto.

Del concejo municipal

Art. 22.—Las secciones cuya población pase de mil habitantes tendrán derecho a elegir un concejo municipal, compuesto de cinco miembros mayores de edad y domiciliados en el distrito. Entre ellos nombrarán un presidente, encargado de mantener el orden en la discusión y representar al concejo en sus relaciones oficiales.

Art. 23.—Los municipales durarán dos años en el ejercicio de sus funciones; el cargo será gratuito; se renovarán por mitad cada año, debiendo sortearse al efecto los que deberán salir por primera vez.

Art. 24.—Las atribuciones del concejo municipal son las siguientes:

- 1º Ordenar la formación del padrón cada dos años, nombrando para ese fin comisiones encargadas de la inscripción;
- 2º Convocar al pueblo para la elección de municipales y jueces de paz, nombrar las comisiones receptoras de votos;
- 3º Juzgar de la validez de las elecciones, proclamar a los municipales y jueces de paz electos, ponerlos en posesión de sus puestos, comunicándolo al gobernador a los fines a que hubiere lugar;
- 4º Establecer impuestos puramente municipales;
- 5º Fijar multas que no excedan de veinte pesos a los infractores de sus ordenanzas;
- 6º Proveer a la administración de los bienes y del caudal municipal, señalando la forma de su inversión o colocación;
- 7º Ordenar las obras públicas vecinales que puedan verificarse con rentas municipales;

- 8º Nombrar un secretario tesorero fuera de su seno, con la asignación mensual que oportunamente pueda fijarle;
- 9º Aprobar las cuentas que presente el secretario tesorero.

Art. 25. — El secretario tesorero tendrá las obligaciones siguientes:

- 1º Refrendar todos los actos del concejo municipal;
- 2º Llevar un libro en que se asienten todas las ordenanzas o resoluciones del concejo y guardar debidamente su archivo;
- 3º Percibir y mantener en depósito las cantidades que se cobren, hacer los pagos respectivos, rendir cuentas y cumplir estrictamente las órdenes del concejo.

Art. 26. — El concejo municipal funcionará seis meses en el año, y en la época o épocas que el mismo determine, celebrando sus reuniones los días que juzgue necesarios.

Sus miembros, al entrar a desempeñar sus funciones, prestarán juramento ante el presidente.

De la elección municipal y jueces de paz

Art. 27. — Las elecciones se practicarán con arreglo a un padrón que el concejo municipal mandará formar, designando al efecto una comisión de tres vecinos de cada distrito, propietarios, mayores de edad, los que deberán inscribir a todos los habitantes domiciliados en la sección respectiva, mayores de dieciocho años, expresando la nacionalidad, estado, profesión y si saben leer y escribir.

Art. 28. — Publicado el padrón, se señalará un término dentro del cual podrá ser tachado por exclusiones o inclusiones indebidas ante el gobernador y demás autoridades territoriales.

Art. 29. — Vencido el término, será elevado en copia con las tachas e informes del gobernador a la resolución del juez letrado y aprobadas o desaprobadas las tachas, se publicará y remitirá a las secciones en número suficiente de ejemplares.

Art. 30. — El padrón así formado será el registro cívico para la elección de los municipales y jueces de paz.

Art. 31. — Cuando el concejo municipal convoque a elecciones, nombrará para el distrito respectivo una comisión de tres vecinos titulares y tres suplentes, encargados de recibir los votos el día de la elección, eligiéndola entre los habitantes mayores de edad.

Art. 32. — El padrón, como el registro de votos, se llevará por duplicado, enviándose un ejemplar al concejo municipal y otro al gobernador.

Del juez letrado

Art. 33. — El juez letrado será nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado; residirá en la capital de la gobernación, gozará del sueldo que le asigne la ley, el cual no podrá ser disminuído mientras permaneciere en sus funciones, y no podrá ser removido sino en la forma establecida para la remoción de los funcionarios de su clase en la capital de la Republica.

—En discusión:

Artículo 34. — Para ser juez letrado se requiere ser ciudadano mayor de edad y haber ejercido la profesión de abogado.

Sr. Febre. — Propongo una modificación en ese artículo.

Al hablarse de las condiciones requeridas para ser juez letrado, podría referirse a las determinadas por la ley orgánica de los tribunales de la Capital. Quedaría así mucho mejor.

Sr. Nongués. — Cuando se estudió este artículo, la Comisión tuvo presente que se iban a establecer estos juzgados en lugares que se encuentran en situación excepcional, y que por lo menos, no se podía exigir las mismas condiciones establecidas para los jueces letrados de la Capital.

Así, pues, creyó que debe dejarse el artículo como venía de la Cámara de Diputados; de otro modo podía hacerse muy difícil encontrar abogados que desempeñen estos puestos.

Sr. Febre. — Se han de encontrar, señor.

Sr. Carrillo. — ¿Y en qué época se ha de hacer este nombramiento?

Sr. Nongués. — Inmediatamente.

Sr. Carrillo. — Para que haya un juez de paz, es preciso que haya mil habitantes.

Sr. Nongués. — Hay un juez letrado para toda la gobernación y esa gobernación tiene, cuando menos, tres o cuatro mil habitantes.

Sr. Carrillo. — ¿En la gobernación del Chaco?

Sr. Nongués. — Hay varias colonias.

Sr. Gelabert. — Sólo la de San Fernando, llamada hoy Resistencia, tiene más de dos mil habitantes.

Sr. Carrillo. — Está dividida.

Sr. Gelabert. — «Reconquista», es otro punto que tiene más de dos mil. No recuerdo el número que tiene Formosa.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 34.

Sr. Febre. — No hay necesidad. Proponía únicamente esta modificación.

Sr. Juárez Celman. — ¿Cuál es?

Sr. Febre. — Que las condiciones requeridas para ser juez letrado sean las establecidas en las diversas ramas de la Administración de Justicia de la Capital.

Sr. Juárez Celman. — No va a querer ir nadie.

—Se da por aprobado el artículo 34, así como los siguientes:

Artículo 35. — Al recibirse de su cargo prestará juramento ante la Suprema Corte de Justicia, y le son aplicables las condiciones de la ley de Diciembre 15 de 1881 sobre organización de los tribunales de la Capital, en cuanto no se opusieren a la presente.

Art. 36. — Los jueces letrados conocerán y resolverán en las causas que en la ley citada en el artículo precedente se atribuyen a los jueces en lo civil, comercial, correccional y criminal y también las que correspondían al juez federal.

—Se lee:

Artículo 37. — El procedimiento ante el juez letrado será el vigente en la capital de la Nación.

Sr. Igarzábal. — Pido la palabra.

¿Cómo se entiende este artículo? ¿Entonces, queda derogada la ley de procedimientos que se sancionó el año 1863, para la tramitación de los asuntos ante la justicia federal?

Este juez tiene también a su cargo la justicia federal.

Está bien que como juez de lo civil, correccional y criminal, deba actuar con la ley de procedimientos vigente de la Capital, pero, como juez federal, si no se dice aquí que queda en vigencia la ley de justicia federal en lo relativo a jueces federales, creo que se va a entender que aun en las asuntos de carácter federal va a actuar con la ley de procedimiento civil.

Me parece que sería muy grave el derogar por medio de esta disposición la ley del caso, para los asuntos que se van a tramitar ante la justicia federal de esos territorios.

Sr. Nougués. — No creo que haya necesidad de establecer esta diferencia.

Este juez viene a ser en lo civil, correccional y criminal, y se encuentra sometido a las disposiciones establecidas por la ley de justicia

local para la Capital; y en esta ley hay un capítulo que se refiere a jueces federales, por el cual se impone a éstos la obligación de sujetarse, en los casos que se refieren al fuero federal, a la ley del año 1863, de que ha hecho mención el señor senador. Por consiguiente, no puede haber lugar a duda.

Sr. Juárez Celman. — Creo que este no es juez federal. Se dice aquí que «ejercerá las funciones de juez federal», lo que prueba que no es juez federal, porque, si lo fuera, no habría necesidad de decir que llenará las funciones de tal.

Se establece que ejercerá las funciones de juez de lo civil, correccional y criminal y las que corresponden al juez federal; de manera que debe aplicar la misma ley, porque no se trata de la justicia federal de que habla la Constitución, sino de una simple determinación que se hace en la ley, a objeto de que se comprenda que las cuestiones que, en la jurisdicción de las provincias o de la Capital, corresponderían al juez federal, deben ser resueltas por este juez único. Por consiguiente, debe aplicarse la ley común.

Sr. Igarzábal. — Pido la palabra.

Lo que salva la objeción que he hecho, es la contestación que da el señor miembro informante de la Comisión, que afirma que la ley del año 1881, al establecer lo relativo a los jueces federales que existen en la Capital — porque hay dos — les prescribe que han de proceder con arreglo a la ley de procedimientos del 63.

Esto, pues, es lo que viene a hacer desaparecer la dificultad. De lo contrario, se entendería que, en casos del fuero federal, se va a actuar con la ley de procedimientos local de la Capital.

Sr. Juárez Celman. — Es claro, porque no hay justicia federal.

Sr. Igarzábal. — Sí, hay; este es juez federal y debe actuar con arreglo a la ley de procedimientos del año 1863.

Sr. Juárez Celman. — ¿Puede ser un mismo individuo juez de provincia y juez federal? ¿Puede ser en la Capital juez en lo civil, y juez federal al mismo tiempo?

Sr. Igarzábal. — No, señor.

Sr. Juárez Celman. — Entonces, este no es juez federal.

Me alegro que estemos conformes en el resultado, aunque por diferentes causas.

Sr. Presidente. — Se va a votar...

Sr. Igarzábal. — No hay necesidad: estoy conforme, después de la explicación que ha

dado el señor miembro informante de la Comisión.

—Se da por aprobado el artículo 37, lo mismo que los siguientes:

Artículo 38. — No podrán ser recusados sin justa causa, y una vez admitida la recusación, corresponderá el conocimiento de la causa al juez de sección más próximo.

Art. 39. — Conocerán en grado de apelación de las sentencias dictadas por los jueces de paz, y su resolución terminará el asunto, bien sea que confirme o revoque la del juez inferior.

Art. 40. — El médico de la gobernación prestará los servicios de médico del juzgado.

Art. 41. — De la sentencia que dicten los jueces letrados en la primera instancia, podrá apelarse para ante la Suprema Corte de Justicia, con arreglo a las leyes de procedimientos para la justicia federal.

Art. 42. — Los jueces letrados elevarán en consulta, aun cuando no se interponga apelación, todas las sentencias definitivas en asuntos en que sean parte el fisco, menores o incapaces.

Art. 43. — Podrán ser nombrados como árbitros arbitradores y resolverán sin apelación las causas que en este carácter se les sometan.

Art. 44. — Habrá un escribano secretario encargado de actuar en los juicios que se sigan ante el juez letrado, y al que le serán aplicables las disposiciones de la ley sobre organización de los tribunales de justicia de la Capital.

Art. 45. — El escribano será nombrado por el Poder Ejecutivo a propuesta del juez letrado, residirá en la capital de la gobernación y gozará del sueldo que le asigne el presupuesto.

De la Legislatura

Art. 46. — Las gobernaciones cuya población alcance a treinta mil almas, constatada por el censo general y los censos suplementarios sucesivos, tendrán una Legislatura que funcione tres meses en el año. Será formada por los delegados de los distritos municipales, a razón de uno por cada dos mil habitantes, y por cada fracción que no baje de mil quinientos. Durarán tres años en el ejercicio de sus funciones y se renovarán por terceras partes cada año, sorteándose al efecto en la primera renovación.

Art. 47. — Para ser miembro de la Legislatura se requiere tener residencia de un año por lo menos en el territorio, ser ciudadano mayor

de edad, y no ocupar en la gobernación ningún empleo a sueldo. Para incorporarse a ella debe prestarse juramento ante el presidente nombrado de su seno.

Art. 48. — Cuando algún territorio tenga la población exigida para poseer una Legislatura, el gobernador, previo consentimiento del Poder Ejecutivo, mandará formar un registro de todos los ciudadanos de la gobernación que quieran inscribirse. Al efecto, nombrará una comisión compuesta de seis vecinos: tres titulares y tres suplentes.

Art. 49. — Este registro deberá renovarse cada tres años y con arreglo a él se verificarán las elecciones de los delegados de los distritos de la legislatura, nombrando a este objeto una comisión receptora de votos en la misma forma y número que dispone el artículo anterior para efectuar la inscripción.

Art. 50. — Los miembros de las comisiones expresadas serán ciudadanos y tendrán las mismas condiciones que exigen los artículos 27 y 31 para las que dirigen el padrón y elección municipal.

Art. 51. — Instalada la primera Legislatura, estas comisiones serán designadas en lo sucesivo por el presidente de ella, asociado al gobernador y juez letrado del territorio.

Art. 52. — Un ejemplar del registro como del acta de elección será enviado respectivamente al gobernador y a la Legislatura.

Art. 53. — El registro podrá ser tachado de la misma manera y siguiendo el mismo procedimiento que fijan los artículos 28 y 29 para el padrón municipal.

Art. 54. — Para la elección de delegados a la Legislatura, como para la de municipales y jueces de paz, se aplicará la ley de elecciones nacionales en todo lo que no se oponga a la presente.

Art. 55. — La Legislatura es el único juez de la elección de sus miembros; podrá votar impuestos locales, ordenar obras públicas y en general dictar las disposiciones convenientes para el adelanto, fomento y mejor gobierno del territorio y sus resoluciones tendrán fuerza de ley, si no son vetadas por el gobernador dentro del término de diez días hábiles después de sancionadas.

Art. 56. — En caso de veto, la Legislatura mantendrá su voluntad, insistiendo con dos tercios de votos sobre su primitiva sanción.

Art. 57. — La Legislatura funcionará en la capital de la gobernación, en las épocas que determine, con arreglo al artículo 46, y podrá con dos tercios de votos acusar al gobernador

ante el Poder Ejecutivo, por falta en el cumplimiento de sus deberes.

Art. 58. — El cargo de miembro de la Legislatura es gratuito y obligatorio, y nadie podrá excusarse sin justa causa.

Art. 59. — El gobernador podrá convocarla a sesiones extraordinarias, y prórrogar las ordinarias.

—Se lee:

Disposiciones transitorias

Artículo 60. — Cada Legislatura tiene derecho de nombrar un delegado, que represente la gobernación ante la Cámara de Diputados, el que durará dos años en el ejercicio de sus funciones, podrá ser reelegido, gozará de la mitad de las asignaciones que corresponde a los diputados nacionales, y tendrá voz en las discusiones pero no voto.

Sr. Febre. — Pido la palabra.

Extraño, señor presidente, que manifestándose el miembro informante de la Comisión tan partidario del respeto por la Constitución nacional, venga por este artículo a infringir abiertamente una de las disposiciones de la misma.

Estos delegados híbridos que ha creado la Comisión, modificando el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, la Constitución no los acepta para la formación de la Cámara de Diputados.

Ella establece que ésta debe formarse de diputados elegidos directamente por el pueblo de las provincias, y no dice: por el pueblo de los territorios federales.

Cuando éstos vengan a ser provincias, porque estén en las condiciones establecidas en esta Constitución que les estamos dando, entonces tendrán el derecho de tener su representante en la Cámara.

Luego, estos representantes, según este proyecto, ¿qué papel van a hacer en la Cámara de Diputados?

No tienen voto, que es uno de los puntos principales para venir a resolver los asuntos que se someten a la consideración de ese cuerpo.

Gozan de medio sueldo.

Hasta es ridícula esta creación...

Sr. Carrillo. — Híbrida.

Sr. Febre. — Híbrida, sí, señor; ya lo he dicho.

No sé que puedan venir de esos territorios grandes oradores a persuadir o hacer cambiar

la opinión en la Cámara de Diputados, sobre todo, tratándose de territorios en los cuales, puede decirse, están por crearse recién los habitantes, o son en su mayor parte extranjeros.

Creo, francamente, que, si se hubiera meditado bastante sobre la inconveniencia y la inconstitucionalidad que entraña este artículo, de seguro que no se hubiera mantenido.

Me parece que esto no ha sido bien pensado por la Comisión.

Siento mucho estar en disidencia con mis honorables colegas de Comisión, y ya he manifestado al principio que, por circunstancias excepcionales, no he podido tomar parte en la consideración de este asunto.

Por estas razones, rogaría al señor miembro informante quisiera suprimir este artículo, para no verme en el doloroso caso de votar en contra de la Comisión.

Sr. Carrillo. — Que se vote.

Sr. Nougués. — Pido la palabra.

Me ha llamado la atención, señor presidente, que el señor senador por Entre Ríos haya afirmado tan categóricamente, que lo que la Comisión aconsejaba era una violación flagrante de la Constitución, y no me he podido explicar en qué podía afirmar el señor senador esa afirmación.

Lamentaba también el señor senador que la Comisión hubiese aconsejado al Senado este proyecto, que venía a crear una representación, a su juicio, bien original, que no le encuentra objeto y que le ha producido mala impresión.

La Comisión no lo ha creído así, señor presidente; ni es ella la que ha inventado esta representación; por el contrario, no ha hecho más que aceptar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que establecía en los territorios nacionales esa representación, que tampoco ha sido inventada por el Poder Ejecutivo, puesto que no ha hecho sino seguir a ese respecto la práctica observada en Estados Unidos de Norte América, como la hemos seguido nosotros respecto de nuestra organización.

La Constitución norteamericana establece que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo, a razón de uno por cada 50 mil habitantes, o por una fracción que no baje de 25 mil, y la Constitución argentina establece también que la Cámara de Diputados será compuesta de Diputados elegidos directamente por el pueblo, a razón de uno por cada veinte mil habitantes, o de una fracción que no baje de diez mil.

De manera, pues, que en Estados Unidos de

Norte América, cuya institución no se diferencia de la argentina más que en el nombre, no se ha creído, como ha creído el señor senador, que era inconveniente la creación de estos delegados.

Sr. Carrillo. — ¿Por qué no les da voto también?

Sr. Nougues. — Porque no son verdaderos representantes.

Sr. Febre. — Porque es una creación sui géneris.

Sr. Nougues. — Ya he dicho que no es una invención de la Comisión: venimos a proponer para la República Argentina lo mismo que existe desde hace muchísimo tiempo en Estados Unidos de Norte América, porque sabemos que allí ha dado muy buenos resultados.

Yo no sé cómo los señores senadores que estan en oposición, no se dan cuenta...

Sr. Febre. — Lo que debía demostrarnos el señor senador, son las ventajas que ha traído al pueblo de la Unión Norteamericana el ingreso de estos delegados a la Cámara de Diputados.

Sr. Nougues. — Se han reconocido las ventajas que resultan de que los habitantes de los territorios nacionales tengan, como todos los demás, quienes hagan conocer del Congreso sus verdaderas necesidades.

De esa manera los ciudadanos que pertenecen a esa fracción de población, no quedan tampoco excluidos de la participación que les corresponde tomar en el Gobierno de la Nación.

Para esto no hay necesidad de que tengan las condiciones de los oradores, como no ha sido necesario exigir las en los ciudadanos que forman la Cámara de Diputados y la de Senadores.

Lo que se necesita, son personas que hayan conocido las necesidades de aquella localidad, y me parece que este objeto puede llenarse perfectamente sin que estos delegados se encuentren adornados con la condición de oradores con que quiere adornarlos el señor senador.

Por otra parte, estos delegados se encuentran en una condición excepcional, puesto que no tienen voto sino voz.

Por lo demás, repito que no es una novedad, que en esto no hacemos otra cosa que seguir el mismo camino que nos ha trazado Estados Unidos de Norte América, donde esta institución ha dado los mejores resultados.

Allí hace muchísimos años que esta ley existe, y se ha reconocido la conveniencia que

hay en que estén representados por medio de estas delegaciones todos aquellos territorios que no tienen las condiciones necesarias para declararse Estados.

Sr. Febre. — Para eso se han creado los gobernadores, para que hagan conocer todas las necesidades de esos territorios.

Por consiguiente, no hay necesidad de esta creación especial.

Sr. Presidente. — Va a votarse el artículo tal como lo ha propuesto la Comisión de Legislación.

—Se vota y es rechazado.

—En seguida se leen y se dan por aprobados los artículos restantes del proyecto, en esta forma.

Artículo 61. — El resultado del escrutinio, la Comisión lo comunicará al gobernador y a los electos, los que procederán a instalar el Concejo Municipal.

Art. 62. — Mientras se confeccione el padrón de cada distrito, los jueces de paz serán nombrados por el Poder Ejecutivo.

Art. 63. — Quedan derogadas las disposiciones de las leyes anteriores que se oponen a la presente.

Art. 64. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

—Se pasa a considerar el despacho que sigue:

2

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1884.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la consideración de vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley, que se refiere a la adquisición del terreno adyacente al nuevo cuartel de artillería en el parque Tres de Febrero.

La situación de ese terreno, ofrecido en venta al gobierno, en condiciones evidentemente aceptables, su extensión proporcional, contiguo al cuartel y limitado por dos grandes avenidas, lo hacen muy conveniente y ventajoso.

El cuartel de artillería necesitaría de esa extensión de terreno para desahogo de las cabalgaduras e instrucciones de la tropa.

En consideración a estas ventajas, el Poder Ejecutivo ha creído deber someter esta propuesta a la resolución de vuestra honorabili-